



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

SENTENCIA

Nº 270/2016

ES COPIA

En Málaga, a once de julio de dos mil dieciséis

Visto, por el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Málaga, don Santiago Macho Macho, el recurso contencioso-administrativo, tramitado como procedimiento abreviado nº 206/2016, seguido para conocer del interpuesto por el Procurador Sr. Torres Chaneta, en nombre de doña [REDACTED] asistida por la Letrada Sra. Planelles Mohedo, frente a resolución sobre responsabilidad patrimonial del AYUNTAMIENTO DE MARBELLA, no comparecida.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El recurso es interpuesto y sustanciado con escrito presentado el 3/05/16, siendo remitido a este Juzgado en reparto realizado el siguiente día 5, y admitido a trámite con resolución de 26/05/2016, que acuerda la tramitación de los autos conforme a las normas del art. 78 de la Ley 29/98.

Segundo.- En la demanda es expuesto cuanto es tenido por conveniente para pedir sentencia que declare nulo el acto recurrido y declare la responsabilidad de la Administración Demandada y condene al Ayuntamiento de Marbella a indemnizar a [REDACTED] la cantidad de 5.652,54 euros más los intereses legales correspondientes, todo ello, con imposición de costas a la demandada.

Tercero.- Recibido el expediente administrativo, la vista del juicio fue el pasado día siete, compareciendo la parte recurrente, que ratifica la demanda. Fijada la cuantía del procedimiento en el importe de la reclamación, practicadas las pruebas que constan en auto y realizadas conclusiones, los autos quedaron para sentencia, constando todo en gabación telemática

Cuarto.- En la tramitación del presente recurso contencioso-administrativo se han observado las prescripciones legalmente establecidas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El objeto del presente recurso es determinar si se justifica a derecho el decreto de 22/02/2016 del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Marbella, que, en el expediente de responsabilidad patrimonial, 104/13, acuerda desestimar la reclamación presentada por la ahora recurrente por daños sufridos el 24 junio 2013, por no concurrir los factores exigidos.

La parte recurrente alega, en síntesis:

-El día 24 de junio de 2013, sobre las 16 horas, mi mandante, [REDACTED], se encontraba andando por la Avda. General López Domínguez, cuando a la altura del número 6, tropezó con algo y cayó al suelo, sin poder evitar la caída, pudiendo observar al levantarse que se trataba de la rejilla de un árbol que se encontraba en mal estado, siendo acompañada de inmediato por su marido hacia los servicios sanitarios.

Código Seguro de verificación: WOkw0Yp4/IebaFpUYbExJA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SANTIAGO MACHO MACHO 12/07/2016 11:19:34	FECHA	12/07/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	1/9



WOkw0Yp4/IebaFpUYbExJA==



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

Que como consecuencia de la caída, mi mandante sufrió lesiones, consistentes en contusión facial y herida inciso contusa en maxilar inferior, tal y como se describe en el parte de urgencias del día de los hechos, 24 de junio de 2013.

Se acompaña como documento número 2, informes médicos de los servicios de urgencias de momento posterior a sufrir el accidente, así como parte de lesiones al Juzgado.

-El marido de mi mandante denunció los hechos en la Policía Local, quienes se desplazaron al lugar del accidente comprobando el estado de las rejillas que bordeaba el árbol, donde cayó mi

mandante. Se acompaña diligencias instruidas por la Jefatura DE Policía Local de Marbella Con Registro General número 8479/13, diligencias remitidas al Juzgado de Guardia, registrándose juicio de faltas número 393/13 del Juzgado de instrucción número 2 de Marbella, que se acompaña como documento número 3 y documento 4, diligencias remitidas por la Jefatura Policía Local al Ayuntamiento de Marbella. Se dejan designados los archivos del Juzgado así como los de la Policía Local para el caso de que fueran impugnados.

-Que mediante escrito de 7 de octubre de 2013, esta parte, a requerimiento del Ayuntamiento de Marbella, aportó los documentos acreditativos de las lesiones que había sufrido mi mandante y procedió a cuantificar los daños sufridos por mi mandante y por ende se cuantificó la reclamación, en el expediente administrativo aperturado por el Ayuntamiento de Marbella con el número 104/13RP de Responsabilidad Patrimonial

-Que a la vista de los documentos e informes aportados al expediente administrativo y resto de documentos obrantes en el expediente administrativo se desprende:

1º Que según se desprende de las fotografías obrantes en las diligencias de la Policía Local de Marbella con Registro General número 08479/13, se ve claramente el estado en el que se encontraba las rejillas que circundan el árbol. Documento número 3 y 4.

2º Que según el informe de nota interna obrante en el expediente con número 0387/2013 se desprende el mal estado no sólo del alcorque metálico sino de la solería del acerado como consecuencia del crecimiento de las raíces. Se acompaña como documento número 5 nota interna 387/13, en el cual se informa el estado de la acera y arboleda donde cayó mi mandante así como el parte de asignación para la reparación de la zona.

Que en el propio informe se hace constar que el servicio de operativos actuó como consecuencia de la caída de [REDACTED] no siendo hasta el 07/10/2013 cuando procedieron a la reparación de la zona afectada.

De hecho la propia unidad de inspección señala que hay varias baldosas sueltas y levantadas por el crecimiento de las raíces de los árboles más rejilla de alcorques levantada junto los contenedores R.S.U., donde se produjo la caída.

En consecuencia, en el ayuntamiento se tenía constancia del estado en el que se encontraba el acerado y las rejillas que recubrían el suelo de la arboleda a la altura del número 6 de la calle por la que andaba mi mandante, y el servicio operativo también tenía constancia y de hecho la reparación se llevó a cabo por los servicios operativos en fecha 12/09/2013, como se desprende del parte de asignación e informe de 16/12/2013 con referencia de expediente número 0387/2013.

-Existe daño material, individualizado y económicamente valuable. Existencia de lesión: Tal y como consta en los documentos obrantes en autos del presente escrito, la [REDACTED]

[REDACTED] sufrió lesiones, como consecuencia de su caída mientras caminaba por la acera de la Avda. General López Domínguez de titularidad municipal, sufrió herida en maxilar inferior, así como contusión a dicho nivel, Véase los informes médicos aportados con el documento número 2.

Dichas lesiones le han mantenido impedida para sus ocupaciones habituales 15 días y han provocado una secuela consistente en perjuicio estético en la cara.

Código Seguro de verificación: W0kw0Yp4/IebaFpUYbExJA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SANTIAGO MACHO MACHO 12/07/2016 11:19:34	FECHA	12/07/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	W0kw0Yp4/IebaFpUYbExJA==	PÁGINA 2/9



W0kw0Yp4/IebaFpUYbExJA==



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

Concurre, por tanto, en la presente reclamación el requisito establecido de la existencia de una lesión que además cumple con las características que se exigen a la misma pues:

Antijurídica por cuanto [REDACTED] no está obligada a soportar dicho daño, ya que el mismo es debido a un anormal funcionamiento del servicio público que compete al Ayuntamiento de mantener en condiciones de seguridad el acerado de las vías públicas.

Es un daño real que se pone de manifiesto en las lesiones sufridas y probadas; y cuantificable e individualizado, conforme a la liquidación practicada en el escrito presentado por esta parte el

07/10/2013 y que damos por reproducido y que se desglosaban en las siguientes cantidades:

15 días impedida x 58,24 € = 900 €.

Secuelas 6 puntos por perjuicio estético ligero (cicatriz cara) = 4.778.94 euros.

Quedando determinada la cuantía de la reclamación en la cantidad de 5.652,54 euros.

Segundo.- El sistema legal de responsabilidad de la Administración responde a una cláusula general de responsabilidad, art. 139 Ley 30/92 y cc, cuya finalidad, en palabras de la más autorizada doctrina, no es convertir al sistema en un puro régimen de causalidad material, en el que el único elemento relevante de imputación sería el nexo causal entre la acción administrativa y el daño resultante, sin atención alguna hacia cualquier criterio legal de imputación, convirtiéndose el sistema en una gigantesca máquina de aseguramiento social frente a todo tipo de daños conectados a una actuación administrativa.

Lo que realmente hace la cláusula general, sin excluir en modo alguno la exigencia de una causalidad o imputación del hecho dañoso a la Administración, que excluye sin más el reconocimiento de que su responsabilidad haya pasado a ser general y objetiva es desplazar el elemento básico de la ilicitud del daño desde la conducta del responsable a la situación del patrimonio de quien sufre el perjuicio, el cual deberá justificar que "no tiene el deber jurídico de soportar" dicho daño, en los términos del art. 149 de la Ley 30/92, para poder justificar su pretensión reparadora, giro al que convencionalmente se ha llamado "objetivación" de la responsabilidad patrimonial de la Administración, introduciendo un cierto equívoco innecesariamente, pues no se quiere decir, obviamente que cualquier perjuicio económico que pueda resaltar de los servicios administrativos tenga causa jurídica para pretender una reparación. La cláusula lleva ínsitos unos criterios normativos de imputación –ilegalidad, culpa subjetiva, culpa objetiva, riesgo y sacrificio especial- que no pueden ser utilizados indistintamente para cualquier tipo de actividad administrativa y ante cualquier evento dañoso, de suerte que si el daño no fuere imputable a la Administración a título de anormalidad del servicio público siempre sería posible tal imputación a título de riesgo o de sacrificio especial.

En la generalidad de los casos, las actividades jurídicas o materiales que la Administración lleva a cabo no son en sí mismas peligrosas ni creadoras de situaciones de riesgo patrimonial, y por ello, si se realizan bajo pautas de normalidad, los eventuales daños resultantes no le son en modo alguno imputables; únicamente su prestación anormal, irregular o deficiente puede operar como criterio legal de imputación de tales daños a la Administración.

Sólo el supuesto de daño producido por actuación de un riesgo creado por la Administración en su propio interés es, en realidad, como ocurre de no muy diferente manera en las situaciones de derecho civil estricto, es el único caso de una responsabilidad patrimonial de la Administración estrictamente objetiva, de causalidad material. Se trata, en este último supuesto, de daños excepcionales derivados de peligros o riesgos que ocasiona la actividad administrativa, en que el título de imputación por riesgo operará siempre que el hecho determinante del daño se hubiera producido, pese a haberse adoptado todas las medidas reglamentarias de seguridad –en otro caso,

Código Seguro de verificación: W0kw0Yp4/IebaFpUYbEXJA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SANTIAGO MACHO MACHO 12/07/2016 11:19:34	FECHA	12/07/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	3/9



W0kw0Yp4/IebaFpUYbEXJA==



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

de haber incumplido las medidas de seguridad el título de imputación sería el funcionamiento anormal-.

Conforme a reiterada jurisprudencia, como la SSTS 1747/2011, de 4 abril 2011, Recurso: 3284/200, FJº 5º, de 23 mayo 2014, recurso 5998/2011 FD 3º, o la de 7 noviembre 2014, recurso 439/2012, FD 4º, que la viabilidad de la declaración de responsabilidad patrimonial de la Administración requiere conforme a lo establecido en el art. 139 Ley 30/92 : a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una

persona o grupo de personas. b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal. c) Ausencia de fuerza mayor. d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente causado por su propia conducta.

Añadiendo la misma sentencia que la jurisprudencia de esta Sala (por todas la STS de 1 de julio de 2009, recurso de casación 1515/2005 y las sentencias allí recogidas) insiste en que "no todo daño causado por la Administración ha de ser reparado, sino que tendrá la consideración de auténtica lesión resarcible, exclusivamente, aquella que reúna la calificación de antijurídica, en el sentido de que el particular no tenga el deber jurídico de soportar los daños derivados de la actuación administrativa". Avanzando más en esa misma línea reiterada jurisprudencia (STS de 25 de septiembre de 2007, rec. casación 2052/2003 con cita de otras anteriores) manifiesta que la viabilidad de la responsabilidad patrimonial de la administración exige la antijuridicidad del resultado o lesión siempre que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido. Se insiste en la STS 19 de junio de 2007, rec. casación 10231/2003 con cita de otras muchas que "es doctrina jurisprudencial consolidada la que sostiene la exoneración de responsabilidad para la Administración, a pesa del carácter objetivo de la misma, cuando es la conducta del propio perjudicado o la de un tercero la única determinante del daño producido aunque hubiese sido incorrecto el funcionamiento del servicio público.

En este sentido, la STS de 05 de diciembre de 2014, recurso 1308/2012, en su FD 3º:

"...La jurisprudencia de esta Sala (por todas la STS de 1 de julio de 2009, recurso de casación 1515/2005 y las sentencias allí recogidas) insiste en que "no todo daño causado por la Administración ha de ser reparado, sino que tendrá la consideración de auténtica lesión resarcible, exclusivamente, aquella que reúna la calificación de antijurídica, en el sentido de que el particular no tenga el deber jurídico de soportar los daños derivados de la actuación administrativa".

Insiste la STS 19 de junio de 2007 , rec. casación 10231/2003 con cita de otras muchas que "es doctrina jurisprudencial consolidada la que sostiene la exoneración de responsabilidad para la Administración, a pesa del carácter objetivo de la misma, cuando es la conducta del propio perjudicado o la de un tercero la única determinante del daño producido aunque hubiese sido incorrecto el funcionamiento del servicio público (Sentencias, entre otras, de 21 de marzo , 23 de mayo , 10 de octubre y 25 de noviembre de 1995 , 25 de noviembre y 2 de diciembre de 1996 , 16 de noviembre de 1998 , 20 de febrero , 13 de marzo y 29 de marzo de 1999)".

Por otra parte, en cuanto a la relación causalidad, dice STS 2070/2011, 15 abril 2011, Recurso: 1993/2006, Recurso: 1993/2006, FJ9 º, o la de 17 diciembre 2013, recurso 4256/2011: es de recordar que constituye jurisprudencia consolidada que la prueba de la relación de causalidad corresponde a quien formula la reclamación, o como dice la sentencia de 18 de octubre de 2005, la carga de la prueba del nexo causal corresponde al que reclama la indemnización consecuencia de la responsabilidad de la Administración por lo que no habiéndose producido esa prueba no

Código Seguro de verificación: W0kw0Yp4/IebaFpUYbExJA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SANTIAGO MACHO MACHO 12/07/2016 11:19:34	FECHA	12/07/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	4/9

W0kw0Yp4/IebaFpUYbExJA==



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

existe responsabilidad administrativa. En el sentido expresado, la sentencia de 15 de junio de 2010 -recurso de casación 5028/2005 -.

En lo que atañe al requisito de imputabilidad del daño a la Administración por una actividad dañosa que revista la forma de omisión y materialmente se deba a un funcionamiento anormal de los servicios públicos las primeras sentencias del TS que recogieron la responsabilidad de la Administración datan de 28 enero 1972, Ar. 351, y 8 febrero 1973, Ar. 622 creándose un sólido cuerpo doctrinal, formado sobre todo en los casos de responsabilidad por defectos en las

carreteras y en asistencia médica, que tienden a mitigar el objetivismo derivado de la letra de las leyes. Como señala la doctrina, y antes ya indicamos, no existirá responsabilidad si la Administración ha respetado los estándares de calidad o nivel mínimo de rendimiento en la prestación del servicio, salvo en los casos concretos de responsabilidad por riesgo -excluida la fuerza mayor- y responsabilidad por enriquecimiento. En consecuencia, en estos supuestos existe una actividad inadecuada de la Administración que posibilita la realización del evento dañoso. Pero la actuación inadecuada de la Administración no es equivalente, ni se produce sólo, por la concurrencia de culpa o dolo del agente autor del daño, ni tampoco por la condición ilegal del acto. La existencia de dolo, culpa o ilegalidad puede ser un indicio calificado a la hora de establecer la obligación de indemnizar, pero no es suficiente por sí sola; pueden existir daños causados por culpa o ilegalidad que, sin embargo no sean indemnizables. Lo que significa actuación inadecuada es que la Administración al realizar la actividad, o inactividad, dañosa ha actuado de manera técnicamente incorrecta, esto es, con infracción de los estándares medios admisibles de rendimiento o calidad de los servicios -infracción de la lex artis médica en este concreto ámbito según las SSTs de 27 julio 2002 y 30 de marzo 2004, entre muchas-. En cada momento histórico, la actividad administrativa debe funcionar con arreglo a unos concretos parámetros de calidad, dependiente del nivel tecnológico, de la disponibilidad de recursos y del grado de sensibilidad social de los ciudadanos. La responsabilidad aparece cuando estos estándares son incumplidos con producción de un daño a una persona o grupo de personas. El problema en consecuencia radica en saber cuáles sean estos estándares, puesto que nuestra Administración, al contrario de lo que sucede en la empresa privada, ni está habituada ni ha sido proclive, a fijar objetivos deseables en el nivel de prestación de servicios, los cuales debieran ser establecidos de manera formal y pública -cual acaece en las llamadas cartas de servicios, reguladas en el art. 16.7 del RD 1259/99-. En su defecto, estos parámetros de rendimiento vienen fijados de manera empírica y casuística por la jurisprudencia, en función de razones de equidad, creando un casuismo tan variado que perjudica la seguridad jurídica, tras valorar cuidadosamente si la actividad o inactividad administrativa es o no reprochable, pues en los supuestos concretos de inactividades no puede deducirse responsabilidad de omisión de actuaciones que no son exigibles de acuerdo con las leyes, con los medios de que la Administración está dotada y con lo que es razonable esperar de ella.

En definitiva, ausentes los estándares o niveles de prestación mínimo o media y los niveles de tolerancia, hay que estar a los precedentes administrativos y judiciales y, en definitiva a valorar las circunstancias de cada caso, conforme a los argumentos de las partes y pruebas practicadas.

Tercero.- Proyectadas las anteriores consideraciones sobre el caso de autos, la acción u omisión administrativa con la que trata de conectarse el supuesto daño producido se insertaría en la materia de competencia local a que se refiere el artículo 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que comprende el mantenimiento de las vías públicas en condiciones adecuadas para su utilización, que se conecta con la previsión del art. 54 de la misma Ley 7/1985, al establecer que "Las entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los

Código Seguro de verificación: W0kw0Yp4/IebaFpUYbEXJA== Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.junladeandalucia.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SANTIAGO MACHO MACHO 12/07/2016 11:19:34	FECHA	12/07/2016
ID. FIRMA	ws051.junladeandalucia.es	PÁGINA	5/9



W0kw0Yp4/IebaFpUYbEXJA==



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa" y en línea con esto, el art. 223 del RD 2568/86, de 28 de noviembre que aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales dispone que "Las entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación, en ejercicio de sus cargos, de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa".

Por su parte, el art. 3.1 del RD 1372/1986, que aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales establece que "1. Son bienes de uso público local los caminos, plazas, calles, paseos, parques, aguas de fuentes y estanques, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía sean de la competencia de la entidad local".

Por tanto, el actuar administrativo debe procurar el mantenimiento de las condiciones mínimas y elementales de seguridad de las calles y paseos públicos locales, toda vez que es inexcusable de mantener tales vías públicas abiertas a la circulación peatonal y viaria, en condiciones tales que la seguridad quienes las utilizan esté norma cuanto a los aspectos materiales de mantenimiento de esas vías para su fin específico, sin que sea permisible que presenten dificultades u obstáculos a la normal circulación peatonal tales como agujeros, depósitos de arena, u otros materiales, etc., sin que por lo menos estén adecuadamente señalizados o con la adopción de las medidas pertinentes para la prevención, en tales casos, de posibles eventos dañosos.

En este sentido, la pavimentación de vías urbanas responde a la necesidad no sólo de garantizar unas objetivas condiciones de salubridad del entorno urbano, sino también de garantizar condiciones objetivas de seguridad; seguridad para el tránsito de vehículos y seguridad para el tránsito de las personas. Esta competencia municipal debe entenderse como servicio público, rechazándose la inclusión dentro del ámbito del artículo 106 de la Constitución Española un concepto estricto de servicio público.

Quedando dicho en el fundamento jurídico precedente que la carga de la prueba es de la parte recurrente, al caso de autos, que la recurrente sufrió caída el 24 de junio de 2.013, sobre las 16 horas, cuando caminaba por la acera de la Ayda. General López Domínguez de Marbella, a la altura del número 6, al tropezar con la reja, en mal estado, del alcorque de un árbol, queda acreditado con lo dicho por el testigo oído en juicio, quien salía de trabajar, viendo a la recurrente venir desde el "Baratillo" y tropezar con la reja.

El hecho también queda acreditado con la inmediata asistencia médica en el Servicio UCCU Marbella, con parte de asistencia de ese mismo día a las 16,22 horas –folio 5 del expediente–; así como con la denuncia del marido ese mismo día ante la policía local a las 17,20 horas, quien acude al lugar fotografía el alcorque y describe la rejilla como " desencajada, en uno de los extremos salido de su posición de encaje con el resto de las demás rejillas constituyendo peligro para los viandantes que transitan por el acerado, teniendo los agentes que acomodar dicha rejilla para evitar más tropiezos" y la coloca en su sitio –folios 1 a 4–.


La cauda probable del desplazamiento es señalada por técnico municipal como crecimiento de raíces de los árboles –folio 43–.

La imputación jurídica a la Administración del daño producido, sólo puede derivar de que la Administración no reparara o señalizara la reja del alcorque en cuestión, siendo la misma, por su estado un peligro para el tránsito público.

Para que la actuación administrativa de reparación y señalización tuviera lugar de acuerdo con un estándar medido de respuesta, es preciso que el Ayuntamiento tuviera o pudiera haber tenido

Código Seguro de verificación: W0kw0Yp4/IebaFpUYbExJA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verificamav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SANTIAGO MACHO MACHO 12/07/2016 11:19:34	FECHA	12/07/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	6/9



W0kw0Yp4/IebaFpUYbExJA==



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

noticia de ello con anterioridad al evento dañoso, puesto que lo exigible es que una vez tenga noticia del desperfecto, o pudiera tenerla, sea señalizado o corregido con la mayor prontitud posible. Al caso, el desperfecto, sea el que se observa en las fotografías, reja saliente, es de lo que se producen por el paso del tiempo y el crecimiento de las raíces del árbol, pero no es incompatible con el uso de la acera, puesto que en el informe de técnico municipal antes citado – folio 43 del expediente-, con fotografía incluida, consta que la acera es de 4 m de anchura, ocupando el alcorque 1,20 metros a uno de los lados, por lo que no impedía el uso normal de la acera para transitar por ella, incluso pisando la reja del alcorque con cuidado.

Aún estimando que la falta de respuesta administrativa es deficiente por no responder al estándar de mantenimiento de la una acera, la misma por sí sola no basta tampoco para imputar la responsabilidad a la Administración. Como se observa en las fotografías precitadas –folios 4 y 43- y queda dicho en el informe del técnico municipal, la acera es ancha, en tramo recto, sin que conste que el día de los hechos hubiera elementos atmosféricos adversos, ni un uso masivo de la misma en el momento de los hechos, 16,20 horas, con lo que el desperfecto además de ser compatible con el uso habitual por cualquiera de la acera, también lo era en ese momento, sin implicar en sí peligro alguno que impida utilizar la acera por otro lado, o pasar por la zona de deterioro, es perfectamente visible a mínima atención que observara la recurrente, persona nacida en 1965 –folio 5 del expediente-.

En definitiva la perspectiva general de la acera no tiene entidad, repetimos para entrañar en sí peligro, siendo en sí irrelevante jurídicamente en orden a la generación de un riesgo resarlicable (en este sentido, entre otras, para asuntos similares STSJ País Vasco de 20 diciembre 2013, rec. apelación 684/11).

Como dice, entre otras la STSJ de Cataluña de 7 febrero 2014, rec apelación 136/13, “no es que se traslade la culpa de la Administración al ciudadano como aduce la parte apelante sino que sí es exigible a los peatones una diligencia mínima al deambular con el fin de sortear los posibles obstáculos de la acera y pavimento, lo que no equivale a una aplicación errónea de la teoría de la culpa y/o responsabilidad objetiva”.

En definitiva, y como dice el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León (sentencia de 16 de abril de 2004), la posibilidad de caerse en la vía pública surge desde el mismo momento en que se transita por ella, sin que las consecuencias de esa caída puedan ser imputadas, sin más, a la administración responsable –en el mismo sentido, la Sala del TSJ de Málaga, en numerosas Sentencias, entre otras la nº 2193/2008, dictada el 28 de julio de 2008 en el recurso nº 59/2001-.

O como dice el Tribunal Superior de Justicia de Asturias llegó a afirmar en su Sentencia de 10 de abril de 2007 (JUR\2007\282055): “Por ello, estamos en presencia de un riesgo que no difiere de otros riesgos normales que tienen que sortear los personas en el viario público, va que no se puede desconocer el estándar mínimo de servicios de demanda social por las consecuencias extremas que pueda producir la aplicación rigurosa del sistema objetivo de responsabilidad patrimonial de la Administración asociado exclusivamente al resultado lesivo sin valorar los demás elementos presentes. Así en muchos casos se trata deficiencias puntuales sin posibilidad de reacción inmediata por ser técnicamente imposible, o que la prestación de servicios conlleva efectos perjudiciales a los que no se puede hacer frente por razones económicas o jurídicas. En efecto, el limitado defecto de la baldosa que refleja la fotografía, no se puede confundir con el deficiente estado de acera, pues no impide ni obstaculiza el tránsito peatonal, sino que resulta plenamente practicable por el común de los usuarios. Constituyendo un obstáculo que puede considerarse normal y propio de la prestación de estado de conservación de las vías publica hasta el extremo de imponer precauciones especiales o estar en determinadas condiciones físicas para salvarlos”.

Código Seguro de verificación: W0kw0Yp4/IebaFpUYbExJA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SANTIAGO MACHO MACHO 12/07/2016 11:19:34	FECHA	12/07/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	7/9



W0kw0Yp4/IebaFpUYbExJA==



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

En el mismo sentido se ha pronunciado en múltiples ocasiones el Consejo Consultivo de Andalucía. Así en dictámenes como, v. gr. n° 736/2014, de 29 octubre, n° 198/2015, de 11 de marzo, el n° 103/2011, de fecha 9 de febrero de 2011, o el n° 688/2010, de 3 noviembre 2010, tiene dicho que los ciudadanos están obligados a observar una diligencia media cuando transiten o se desplacen por lugares públicos, de modo que no toda deficiencia en tales espacios puede considerarse significativa a los efectos de hacer nacer la responsabilidad patrimonial de la Administración, sino sólo aquella que escape al dominio propio de la referida diligencia media o diligencia más intensa que singulares circunstancias pueden imponer al ciudadano. En

los eventos dañosos correspondientes a "caídas en vía pública", deben distinguirse los supuestos que implican una manifiesta infracción de los deberes de diligencia en el cuidado de la vía pública (por ejemplo: los ciudadanos). No resulta exigible, según la conciencia social, que en una gran ciudad el pavimento de toda ella carezca de fisuras menores, o no haya alguna ausencia de losetas, pues la tarea que conduciría a ello es prácticamente imposible.

También destaca la expresiva STS, Sala 1ª de 22 de febrero de 2007 que " Es un criterio de imputación del daño al que lo padece la asunción de los riesgos generales de la vida (STS 21 de octubre de 2005 y 5 de enero de 2006), de los pequeños riesgos que la vida obliga a soportar (SSTS de 11 de noviembre de 2005 y 2 de marzo de 2006) o de los riesgos no cualificados, pues riesgos hay en todas las actividades de la vida (STS 17 de julio de 2003), en aplicación de la conocida regla id quod plerumque accidit (las cosas que ocurren con frecuencia, lo que sucede normalmente), que implica poner a cargo de quienes lo sufren aquel daño que se produce como consecuencia de los riesgos generales de la vida inherentes al comportamiento humano en la generalidad de los casos, debiendo soportar los pequeños riesgos que una eventual falta de cuidado y atención comporta en la deambulación por lugares de paso" .

Cuarto.- Conforme previene en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, tras la reforma por Ley 37/2011, en vigor desde el 31 octubre 2011, procede imponer costas a la parte recurrente, pero la inexistencia al acto del juicio de la Administración, determina la no imposición.

En atención a lo expuesto,

FALLO

Primero.- Desestimar el presente recurso interpuesto en nombre de doña [REDACTED]


Segundo.- Sin imponer el pago de las costas del juicio.

Así lo acuerdo y firmo. don Santiago Macho Macho, Magistrado-Juez del Juzgado Contencioso-Administrativo n° 5 de Málaga y provincia, de lo que yo la Secretaria, doy fe.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso de apelación

Código Seguro de verificación: WOkw0Yp4/IebaFpUYbExJA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verificav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SANTIAGO MACHO MACHO 12/07/2016 11:19:34	FECHA	12/07/2016
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	8/9


WOkw0Yp4/IebaFpUYbExJA==